

pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Gara.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M<sup>a</sup> Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Noviembre quince de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco, por los CC. Justo Díaz del Castillo, Rafael Ricalde y Amado Baleazar, contra el jefe político de San Juan Bautista, que los condenó correccionalmente á quince días de prision.*

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR  
FISCAL.

C. Juez:

El fiscal dice: El auto del día dos de este mes asienta, que el caso de los quejosos no se halla comprendido en la fracción 1<sup>a</sup> del artículo 1<sup>o</sup> de la ley orgánica de 1<sup>o</sup> de Enero de 1869.

En cumplimiento, sin embargo de la ley citada, el fiscal viene hoy á emitir su parecer, en cuanto al recurso de amparo, reproduciendo ante todo el pedimento núm. 874 que se halla á fojas 3.

El C. Lorenzo Ponz, que funciona de jefe político, dice de un modo vago, que los quejosos concurrían á juntas que clandestinamente se celebraban con el objeto de trastornar el orden público; por lo que, autorizado por el ejecutivo del Estado, y conforme al artículo 20 de la ley de 13 de Noviembre de 1852, les aplicó quince días de arresto.

Esa ley, además de ser inconstitucional, está expresamente derogada en la parte en que hace referencia de los que turban la tranquilidad pública, por la suprema ley de 6 de Diciembre de 1856, en que se establece terminantemente en el artículo el fuero privativo de la justicia federal para conocer de los delitos de que trata la misma ley.

Observe el C. juez que las reuniones sospechosas á que se contrae el C. Ponz, son las de los diputados que' aprisionados, fueron consignados á la justicia federal, con la nota de presuntos reos del delito de abrogacion del poder público. ¿Por qué no fueron igualmente consignados estos ciudadanos? A haberlo sido, tal vez se hallarían en libertad como los CC. Justo F. Santa Anna y Arcadio Zentella, que el fiscal los tiene por libres sin duda por disposicion del juzgado.

El fiscal, por tanto, considera que los quejosos han sido juzgados por autoridad incompetente y contra las prescripciones de los artículos 16 y 21 de la Constitución federal; comprendido por tanto en las fracciones 1<sup>a</sup> y 3<sup>a</sup> del artículo 1<sup>o</sup> de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, y por lo que pide se les ampare y proteja y se les ponga en inmediata libertad.

San Juan Bautista, Octubre seis de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. P. Rosado.*

### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

San Juan Bautista, Octubre siete de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos: con lo pedido por la fiscalía y considerando: que si bien por el auto de dos del corriente se declara que el caso del presente juicio no pertenece á la fracción 1<sup>a</sup> art. 1<sup>o</sup> de la ley del 20 de Enero de 1869, esto no ha sido prejuzgar la cuestion, supuesto que aquel concepto bien podia reformarse en definitiva con vista de nuevos

datos, ó con mas atenta consideracion del asunto: que en efecto, del nuevo informe emitido por el C. gefe político Lorenzo Ponz queda fuera de duda, que la pena gubernativa aplicada á los CC. Justo Castillo, Amado Balcázar y Rafael Ricaldi, ha sido por conatos de perturbacion del orden público, hecho comprendido en la ley de seis de Diciembre de 1856, que por lo tanto, estos individuos debieron ser consignados á este juzgado, con arreglo á la segunda parte del artículo 14 de la constitucion federal; y que por lo mismo, los quejosos tienen derecho al amparo que solicitan, por estos fundamentos se decreta.

Primero; la justicia de la Union ampara y protege á los referidos ciudadanos.

Segundo; notificado á quienes corresponden, elévense los autos á la superioridad para su revision.

Tercero: en atencion á que es de esperarse la ejecutoria suprema para hacer efectivo el presente fallo, seria ilusorio, por estar al cumplirse la condena de los promoventes caso no previsto con el artículo 13 de la ley de la materia, notifíquese desde luego á la autoridad causante para su inmediato cumplimiento. Así lo proveyó el C. Lic. Limbano Correa, juez de Distrito del Estado, y firma conmigo su escribano, que doy fé.—  
*L. Correa.*—Ante mí, *Gabriel Sosa.*

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Noviembre catorce de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Tabasco por los CC. Justo Diaz del Castillo, Rafael Ricalde y Amado Balcázar, contra el gefe político de San Juan Bautista que los condenó correccionalmente á quince dias de prision: Vista la sentencia pronunciada el dia 7 del mes próximo pasado por el juzgado de Distrito de Tabasco, que en la par-

te jurisdiccional declara, que la justicia de la Union ampara y protege á los referidos CC., y ademas: que en atencion á que es de esperarse la ejecutoria suprema para hacer efectivo el fallo seria ilusorio por estar al cumplirse la condena de los promoventes, caso no previsto en el art. 13 de la ley de la materia, se notifique desde luego á la autoridad causante para su inmediato cumplimiento.

Considerando respecto de lo primero: que en el expediente aparece que el prefecto político de San Juan Bautista procedió contra los quejosos por considerarlos trastornadores del orden público y de la tranquilidad del país, en cuyo caso debió poner á los quejosos á disposicion de la autoridad federal, segun lo dispuesto en la ley de 6 de Diciembre de 1856 y no proceder gubernativamente contra ellos, cuyo procedimiento viola la garantía á que se refiere el art. 14 de la Constitucion federal.

Considerando respecto de lo segundo: que determinar como se determinó que la sentencia del juzgado de Distrito se ejecutase inmediatamente y por lo mismo antes de que esa sentencia fuese confirmada ó revocada por esta Suprema Corte, es un acto contrario á la ley de 20 de Enero de 1869, se declara:

Primero; que se confirma la sentencia pronunciada el 7 del mes próximo pasado por el juzgado de Distrito de Tabasco, en la parte que declara que la justicia de la Union ampara y protege á los quejosos.

Segundo; que se reprueba en la parte relativa á haber mandado que se ejecutase dicha sentencia, antes de estar confirmada ó revocada por esta Corte Suprema.

Devuélvase sus actuaciones al juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el tomo.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos

y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Noviembre diez y seis de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta* oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Tabasco por el C. Zeferino San Roman, contra los procedimientos del C. jefe político del centro, por violación de garantías.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El fiscal dice: La providencia interlocutoria dictada el día 2 de Octubre, prejuzga por completo la decision final del presente juicio, al dar por sentado que el caso no se halla comprendido en la fraccion 1ª del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, cerrando así toda disension judicial.

Obsequiando, sin embargo, los preceptos de la citada ley orgánica, el fiscal reproduce hoy en todas sus partes el pedimento número 895, por no considerar satisfechas las razones allí espuestas, con las reflexiones del auto citado antes.

La falta del C. San Roman, si es que existia, no tocaba al gobierno ni al jefe político corregirla, sino al H. ayuntamiento de esta ciudad, supuesto que hacia uso de su carácter de síndico procurador, en el que debía funcionar, con el solo hecho de terminarse su licencia, y por corresponder el orden económico de la cárcel pública á las atribuciones del municipio, conforme á las

ordenanzas del Estado de 21 de Noviembre de 1866; y al ser juzgado *inaudita parte* por una autoridad extraña, segun lo demuestra el informe que obra á fojas 10, del C. Lorenzo Ponz, se han violado las garantías del artículo 16 de la constitucion vigente de 1857.

No opina el fiscal del mismo modo que el quejoso, al establecer que se han violado las garantías de los artículos 18 y 19 del mismo código; porque ellas se refieren á los procedimientos del orden jurídico, que en el presente caso no han tenido lugar.

Por lo que, concluye el fiscal, pidiendo se ampare y proteja al C. Zeferino San Roman en contra de la disposicion que lo ha condenado á un mes de prision, en contradiccion de las garantías de los artículos 16 y 21 del código federal, mandando que inmediatamente se lo ponga en libertad.

San Juan Bautista, Octubre seis de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. P. Rosado.*

### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

San Juan Bautista, Octubre nueve de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos: con lo ultimamente solicitado por el C. fiscal, y considerando: que si bien al dictar el auto de dos del corriente sobre suspension inmediata, se toma como fundamento para denegarla que el caso del promovente no pertenece á la fraccion 1ª artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, esto no ha sido, como supone el C. fiscal, prejuzgar por completo la cuestion, supuesto que aquel concepto bien podia reformarse en definitiva, teniendo á la vista nuevos datos ó reflexionando mas detenidamente sobre el asunto; que en el caso presente no hay lugar á tal rectificacion, en virtud de que el segundo informe, fojas 10, de la autoridad causante, no aduce nuevas circunstancias que den otra faz al hecho que